

Iquique, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

Se reproduce la sentencia en alzada en su parte expositiva, considerandos y citas legales.

Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE:

PRIMERO: El abogado Mauricio Henríquez Barraza, por la parte demandante, se alza en contra de la sentencia de primer grado por haberse desestimado el daño emergente, señalando que su parte acreditó el daño ocasionado con la extensa prueba que rindió y a la que se refiere el motivo sexto del fallo, tales como permiso de edificación; “Proyecto de reconstrucción de viviendas afectadas por socavones”, de Abril de 2020; Acta de reunión unidad de socavones Serviu Región de Tarapacá; anexo de contrato de arrendamiento de 1 de agosto de 2019; boletas electrónicas N° 9437464 y N° 10630904, emitidas por la demandada; carta de 30 de agosto de 2018, suscrita por la demandante; carta de 14 de septiembre de 2018 suscrita por la demandada; certificado de daños N° 006/2018 emitido por la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio; certificado de daños N° 062/2016 emitido por la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio; proyecto de reconstrucción de vivienda dañada por socavón; Especificaciones técnicas de arquitectura, proyecto de reconstrucción de viviendas afectadas por socavones; reclamo interpuesto ante la Superintendencia de Servicios Sanitario folio N° 20307055; informe de suelos construcción viviendas localidad El Boro, comuna de Alto Hospicio; fotografías del inmueble; testimonial; oficio y anexo 1, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios; e informe denominado “Construcción de la obra a ejecutar Informe Técnico emitido en el año 2019 respecto de la propiedad sub lite.”, del que se desprende que la realización de los trabajos que implican demolición y reconstrucción de la vivienda siniestrada asciende al monto de 1.080,76 Unidades de Fomento.



Pide, al finalizar, que se confirme la sentencia, y que se “...la modifique sólo en cuanto considere la indemnización por daño emergente a los demandados en relación a la prueba rendida por esta parte, sea entregando el monto por la pérdida total del inmueble hasta llegar a la cifra total pretendida en su demanda, o bien, a otra que se considere proporcional a mal sufrido por los demandantes.”.

SEGUNDO: Por su parte, los abogados Patricio Torres Velozo y Edwin Riffo González, por Aguas del Altiplano S.A., recurren de apelación en contra de la referida sentencia por el rechazo de las excepciones de prescripción, y de inexistencia de responsabilidad extracontractual, alegando además que su parte no incurrió en culpa, y que el daño moral no está probado.

Sobre el primer punto, expresan que la demanda se presentó el 25 de agosto de 2020, pese a que los actores tuvieron conocimiento de los hechos el mismo día en que ocurrieron, y que la propiedad, conforme los dichos de los demandantes y su documental, fue declarada inhabitable en dos oportunidades, el 20 de junio de 2016, y el 24 de enero de 2017, por lo que, siguiendo el criterio de la Excma. Corte Suprema, en cuanto a que el plazo de prescripción se cuenta desde que el daño se hizo evidente, la excepción deducida debió ser acogida de conformidad a lo establecido en el artículo 2332 del Código Civil.

En cuanto al segundo aspecto, estiman que la relación existente entre las partes es de carácter contractual, por lo que la demanda no podía prosperar ya que del relato de los demandantes se puede colegir que el supuesto desperfecto no ocurrió en las redes públicas de agua potable, sino que se produjo en la instalación domiciliaria, la cual se encuentra definida en el artículo 53 letra a) de la Ley General de Servicios Sanitarios; añadiendo que los demandantes reconocen en su demanda que al verse privados del suministro de agua potable preguntaron a sus vecinos si contaban con éste, percatándose que el



corte afectaba solo a su domicilio, cuestión que solo se explica desde la óptica de encontrarse el desperfecto en la instalación domiciliaria.

En lo tocante a los aspectos de fondo, sostienen que si la causa basal de la rotura de matriz fue la existencia de un socavón, debe descartarse que la causa de los daños haya sido alguna rotura en la red pública, desde que, si existió ésta se debió a un socavón de origen desconocido, por lo que la única obligación de su representada frente a una emergencia, es atenderla conforme a los parámetros establecidos en la normativa sectorial, lo que hizo; y que no existe prueba de haber existido escurrimientos de agua en la vía pública o defectos en la red de agua potable que hayan afectado a otros vecinos del sector, alegando por último que el daño moral no fue probado, cuestionando el mérito de los informes psicológicos y de la testifical, pidiendo al concluir que se revoque la sentencia en la parte apelada, rechazando la demanda con costas.

TERCERO: Resumidos los libelos de apelación, se desestimarán.

Desde luego debe serlo el correspondiente a la parte demandante, porque si bien en la causa consta el estado de deterioro en que quedó el inmueble de los actores, no se rindió probanza alguna tendiente a probar su estado anterior, es decir, antes de producirse el socavón, ya que la pericia rendida, en extremo inconsistente, no entrega datos sobre el punto, y menos aún es posible desprenderlos del valor del bien, dado que del certificado de avalúo que rola en autos aparece que, al 29 de diciembre de 2020 su avalúo total era de \$6.838.262.

CUARTO: Y, tratándose del recurso de la parte demandada, esta Corte comparte los razonamientos del sr. Juez, agregando sí, respecto de la prescripción, que la argumentación no posee mérito para ser acogida, ya que el primer certificado de daños emitido por la DOM de Alto Hospicio, de 20 de junio de 2016, da cuenta que la



propiedad se encontraba en condición de reparable, producto de daños sufridos en la vivienda a causa del socavamiento del terreno, agregando que no obstante, mientras no se repararan esos daños, la vivienda quedaba en condición de inhabitable; en tanto el segundo certificado de daños, de 24 de enero de 2017, es categórico sobre la inhabitabilidad e imposibilidad de reparación debido a un asentamiento diferencial y socavamiento de terrero, fecha que, en consecuencia, definió la situación del bien y permitió a la parte demandante decidir iniciar su acción.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **SE CONFIRMA** la sentencia de veinticuatro de julio pasado.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministro señora Mónica Olivares Ojeda.

Rol N° 495-2023 Civil.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros sra. Mónica Olivares Ojeda y sr. Pedro Güiza Gutiérrez, y el Fiscal Judicial sr. Jorge Araya Leyton. Iquique, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.

En Iquique, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitres, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWRPXJGQDX Y